



RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/28153 a 184/28155

15/09/2025

79749 a 79751

AUTOR/A: ACEDO REYES, Sofía (GP); ALFONSO SILVESTRE, Alma (GP); ALÓS LÓPEZ, Ana Isabel (GP); BAYÓN ROLO, Juan Andrés (GP); BELMONTE GÓMEZ, Rafael Benigno (GP); GARRE MURCIA, Cristóbal (GP); GARRIDO VALENZUELA, Irene (GP); HOYO JULIÁ, Belén (GP); IBÁÑEZ HERNANDO, Ángel (GP); LORENTE ANAYA, Macarena (GP); OLANO VELA, Jaime Eduardo de (GP); PÉREZ RECUERDA, Isabel Gema (GP); PRIETO SERRANO, María Isabel (GP); SÁNCHEZ TORREGROSA, Maribel (GP); TENIENTE SÁNCHEZ, Cristina (GP); TORRES TEJADA, María (GP); VÁZQUEZ BLANCO, Ana Belén (GP)

RESPUESTA:

En relación con las iniciativas parlamentarias de referencia, se facilita la siguiente información:

Respecto a la cuestión de la tramitación de los expedientes de incapacidad temporal e incapacidad permanente, cabe aclarar, en primer lugar, que la normativa reguladora de la incapacidad temporal (IT) establece que el derecho al subsidio se extinguirá, entre otras situaciones, por el transcurso del plazo máximo de quinientos cuarenta y cinco días naturales desde la baja médica, por alta médica por curación o mejoría que permita al trabajador realizar su trabajo habitual o por ser dado de alta el trabajador con o sin declaración de incapacidad permanente. En cualquier caso, el hecho de haber agotado los 545 días no implica necesariamente el reconocimiento de una incapacidad permanente, sino que en los casos de extinción de la IT por alta médica con propuesta de incapacidad permanente o por el transcurso de los 545 días naturales, se prolongan los efectos económicos de la IT hasta la notificación de la resolución de calificación de la incapacidad permanente, que puede ser estimatoria o denegatoria, en función de las lesiones y su afectación sobre la capacidad laboral.



En segundo lugar, desde el inicio de un proceso de incapacidad temporal hasta su extinción intervienen distintos actores, como son los Servicios Públicos de Salud, Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social y las Entidades Gestoras (INSS e ISM).

Es relevante indicar que la incidencia y duración de los procesos de IT se ve afectada por varios factores. Así, desde el año 2020 hasta el año 2024 el número de afiliados a la Seguridad Social se ha incrementado más de un 12% (afiliados en alta en el último día), lo cual tiene una importante repercusión en el número de procesos de IT. Asimismo, la escasez de facultativos y el impacto de las listas de espera de los Servicios Públicos de Salud afectan directamente en la duración de los procesos de baja.

Con la finalidad de reducir la duración de los procesos de IT, se ha publicado la Resolución de 3 de julio de 2025, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, para la mejora en la gestión de la incapacidad temporal y de la asistencia sanitaria cuyo objetivo es mejorar la eficacia en la gestión de la prestación de Incapacidad Temporal derivada de Contingencias Comunes de determinadas patologías traumatológicas. Asimismo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha suscrito convenios con las distintas Comunidades Autónomas para el control de la incapacidad temporal.

Respecto al número de bajas de larga duración que se han convertido en invalidez permanente, conviene matizar lo que se plantea en la pregunta, en el sentido de que se hace referencia a pensiones de incapacidad permanente y no de invalidez y se entiende que la pregunta se refiere al resultado de expedientes por agotamiento de la incapacidad temporal a los 545 días o 18 meses.

En este sentido, la pregunta parte de una referencia de que la acumulación de expedientes está derivando en un crecimiento exponencial de las “pensiones de invalidez”. Esta afirmación no es correcta, dado que de los datos que se acompañan se puede comprobar cómo el número de expedientes aprobados de incapacidad permanente se mantiene estable en torno a los 80.000 expedientes anuales en el período 2020-2025. Es decir, a diferencia de otras pensiones como la de jubilación en que la pirámide demográfica puede tener una mayor incidencia en el reconocimiento de un número mayor de pensiones, el ámbito de la incapacidad permanente es una cuestión más estable ya que no está ligada directamente a la evolución demográfica.

Lo que se está produciendo en los últimos ejercicios no es un crecimiento exponencial de las pensiones de incapacidad permanente, sino un incremento de los expedientes de incapacidad permanente que se inician por agotamiento de la





incapacidad temporal y que debe gestionar el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o, en su caso, el Instituto Social de la Marina (ISM), dado que, de prolongarse la situación de incapacidad temporal hasta ese punto, la ley prevé el inicio de oficio de un expediente de incapacidad permanente.

Ello no presupone que el resultado de dicho expediente vaya a ser una aprobación, sino que, por el contrario, del análisis efectuado por los equipos de valoración de incapacidades, se deriva un mayor número de denegaciones, al comprobar que las patologías de los ciudadanos en relación con su profesión habitual no resultaban en la asignación de un grado de incapacidad.

Por ello, y según los datos obrantes en el INSS, y del análisis conjunto de dichos datos se desprende que derivado del incremento de expedientes iniciados de oficio, hay tanto un crecimiento de expedientes aprobados, como, en una mayor medida, un crecimiento de expedientes denegados de esta procedencia.

Estos resultados confluyen en una tendencia que puede categorizarse como estable en el número de expedientes de incapacidad permanente aprobados totales, con un ligero incremento en 2024 que en ningún caso puede calificarse como de exponencial.

Finalmente, en contestación a la cuestión de las previsiones de gasto en pensiones de invalidez para el año 2025, cabe indicar que, dado que los Presupuestos Generales del Estado han sido prorrogados, el crédito para el gasto de pensiones de incapacidad permanente se encuentra igualmente prorrogado.

Madrid, 20 de octubre de 2025